



Consejo de Seguridad

Distr. general
24 de octubre de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 24 de octubre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Me refiero a mi carta de 6 de agosto de 2002 (S/2002/903).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido de Portugal el informe complementario adjunto (véase el anexo) presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001).

Le agradecería que hiciera distribuir esta carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) **Jeremy Greenstock**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Carta de fecha 17 de octubre de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente de Portugal ante las Naciones Unidas

A petición de mi Gobierno, tengo el honor de transmitirle el segundo informe que presenta Portugal al Comité contra el Terrorismo en virtud del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el apéndice).

Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su apéndice como documento del Consejo de Seguridad.

(*Firmado*) Gonçalo **Santa Clara Gomes**
Representante Permanente de Portugal
ante las Naciones Unidas

Apéndice

Informe nacional al Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo (aclaraciones complementarias)

Apartado a) del párrafo 1

El Código Penal portugués **no incluye una definición expresa del acto terrorista**, aunque esa definición está implícita en las definiciones de grupo u organización terrorista (artículo 300, párr. 2)) y de terrorismo (artículo 300, párr. 1)).

Así pues, por *organización terrorista* se entiende cualquier grupo de dos o más personas que, actuando de manera coordinada, traten de:

Poner en peligro la integridad o la independencia nacional,

Impedir, alterar o subvertir el funcionamiento de las instituciones del Estado de conformidad con la Constitución,

Obligar a la autoridad pública a realizar un acto, abstenerse de realizarlo o tolerar su realización,

O bien intimidar a ciertas personas, grupos de personas o al público en general mediante la comisión de ciertos delitos.

La sanción es de 5 a 15 años de prisión.

Se entiende que comete actos individuales de terrorismo aquel que, actuando con los mencionados propósitos, cometa:

- Delitos contra la vida, la integridad física o la libertad individual;
- Delitos contra la seguridad de los transportes y las comunicaciones, incluidas las comunicaciones telegráficas, telefónicas, radiofónicas o de televisión;
- La creación deliberada de un peligro común mediante incendios, difusión de sustancias radiactivas o de gases tóxicos o asfixiantes, inundaciones o aludes, destrucción de edificios, contaminación de los alimentos y el agua destinados al consumo humano o difusión de enfermedades, plagas, o plantas o animales dañinos;
- Sabotajes;
- Delitos que impliquen la utilización de energía nuclear, armas de fuego, sustancias o artefactos explosivos, artefactos incendiarios de cualquier tipo y paquetes o cartas bomba.

La sanción es de 2 a 10 años de prisión.

Hay que señalar que esa **ausencia de definición del acto terrorista parece intencional**, dado que la aplicación conjunta de los artículos 300, 301 y 299 2) del Código Penal abarca una serie de actos y actividades diferentes, de cualquier naturaleza (incluso no delictiva), dentro de los límites impuestos por los principios de la legalidad y la tipificación del delito y siempre que tales actos o actividades tengan intención dolosa, en particular con finalidad terrorista.

El Código Penal sanciona, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) del artículo 299, actos que no son en sí delictivos —por ejemplo, la recaudación de fondos— pero que **guardan relación** con actos delictivos, en particular de carácter

terrorista. Así, los **actos de financiación del terrorismo son reprimidos por la ley** tanto en virtud del párrafo 1) del artículo 300 del Código Penal (**promoción o apoyo de grupos terroristas**, cualquiera que sea el tipo de apoyo) y del párrafo 5) del artículo 300 (**preparación del establecimiento de un grupo terrorista**). Los primeros se sancionan de uno a cinco años de prisión y los segundos de uno a ocho años de prisión.

De conformidad con el artículo 5 del Código Penal, la legislación penal portuguesa se aplicará a los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 300 (grupo u organización terrorista) o 301 (terrorismo).

Se trata de un excepción al principio de la jurisdicción territorial que permite realizar una investigación siempre que haya motivos razonables para creer que una persona o entidad promueve de algún modo la financiación de grupos terroristas que actúen exclusivamente en el extranjero. Los artículos 300 y 301 no están sujetos a las restricciones sobre la aplicación de la legislación portuguesa que se especifican en el artículo 6 del Código Penal.

La legislación portuguesa actualmente en vigor tiene por objeto esencial luchar contra el blanqueo de dinero **derivado de hechos ilícitos**; sin embargo, sus disposiciones también prevén la **lucha contra los fenómenos conexos, tales como la financiación del terrorismo**, según estipula el artículo 2 de la Ley 10/2002 que añadió los artículos 8-A a 8-D al Decreto Ley 325/95. Ese Decreto Ley se refiere al Decreto Ley 313/93, que incorporó al ordenamiento jurídico portugués la Directiva 91/308 de la CEE (represión de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de dinero).

Si se leen conjuntamente esos instrumentos, se llega a la conclusión de que la obligación de comunicar las transacciones sospechosas o las que superan ciertos límites, se **aplica, además de a los órganos financieros**, a las siguientes entidades: casinos, agencias inmobiliarias, empresas de transporte de fondos, notarios, registradores de la propiedad y de comercio, así como comerciantes de antigüedades y obras de arte, metales y piedras preciosas, aeronaves, embarcaciones y automóviles (artículos 4 a 8-C del Decreto Ley 325/95).

El incumplimiento de esa obligación, incluso por negligencia, constituye una falta menor que se sancionará con multa de hasta 500.000 euros.

El incumplimiento de la obligación de informar, según lo previsto en el artículo 242 del Código Penal, también entraña, aparte de una falta, una responsabilidad disciplinaria o penal cuando se trata de funcionarios, tal como se definen en el artículo 386 del Código Penal, incluidos **los notarios y las personas jurídicas públicas** a través de sus representantes legales.

En lo que respecta a los abogados, de conformidad con el Estatuto del Colegio de Abogados, combinado con la Directiva 2001/97 de la Comunidad Europea, los profesionales jurídicos independientes tienen la obligación de informar sobre cualquier delito del que tengan conocimiento, en particular las operaciones de las que sospechen que guardan relación con actividades terroristas, sin perjuicio del secreto profesional que deben respetar en las relaciones con sus clientes.

Apartado b) del párrafo 1

El 2 de agosto de 2002 Portugal ratificó el Convenio para la represión de la financiación del terrorismo. Actualmente está estudiando la posibilidad de introducir enmiendas en la legislación penal a fin de asegurar la plena compatibilidad del ordenamiento jurídico portugués con las disposiciones de ese Convenio, sin perjuicio de lo que se ha dicho en relación con el apartado a) del párrafo 1. Si tales enmiendas se estimaran necesarias, en particular considerando la necesidad de tipificar las disposiciones del derecho penal, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, someterá las propuestas pertinentes a la aprobación del Parlamento.

Apartados c) y d) del párrafo 1

Las medidas aplicables, independientemente de cualquier lista existente, se indican en relación con el apartado a) del párrafo 1 en lo que respecta al blanqueo de dinero. Sin embargo, la congelación de fondos en Portugal, en situaciones distintas de las contempladas en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado portugués, es decir, en casos que no se refieran a las personas y entidades especificadas en las listas publicadas por órganos cuya competencia en la materia ha sido reconocida por Portugal (artículo 8 3) de la Constitución portuguesa), **sólo es posible en el marco de un procedimiento legal***.

Así, **no existen procedimientos administrativos para la congelación de fondos**, ni siquiera a los efectos de una investigación criminal y sin relación con la comisión de determinados delitos.

En el contexto de la represión del delito, es posible tomar medidas encaminadas a confirmar las sospechas de vinculaciones con el terrorismo: en tales casos la congelación podrá decidirse una vez iniciado el procedimiento penal necesario y dictada la subsiguiente orden judicial para iniciar la investigación.

Los fondos derivados de actividades lícitas pueden plantear problemas, en particular en el contexto de las operaciones financieras, considerando que la legislación en vigor no impone actualmente a los bancos y otras instituciones financieras la obligación de comunicar las operaciones de las que se sospeche que guardan relación con la financiación del terrorismo, sino solamente la obligación de comunicar las operaciones respecto de las cuales existan pruebas que indiquen un vínculo con las actividades terroristas.

Sin embargo, la legislación portuguesa no prevé mecanismos especiales de vigilancia con tal fin. Si los fondos pertenecen a personas jurídicas, entre otras las de naturaleza civil como son las fundaciones o asociaciones “benéficas” constituidas en Portugal, las autoridades pueden poner fin a la existencia de esas personas jurídicas si los fondos se utilizan con fines ilícitos (artículos 157, 182 y 192 del Código Civil).

Como se ha explicado, aunque el procedimiento para levantar el secreto bancario y fiscal en relación con varios delitos, entre ellos el de terrorismo (Ley 5/2001 de

* El Reglamento 2580/01 de la Unión Europea prevé la congelación de las cuentas y activos pertenecientes a personas citadas en las listas publicadas por la Unión Europea que se hallan en bancos e instituciones de crédito que operen en Portugal; el Reglamento 881/02 de la Unión Europea dispone que el mismo procedimiento se aplique en relación con las personas o entidades enumeradas en las listas de las Naciones Unidas (talibán, Al-Qaida y asociados).

31 de octubre de 2001) se ha simplificado y acelerado, **ese procedimiento requiere siempre una orden judicial.**

Así, en la actualidad no existen medidas concretas de vigilancia ni legislación en vigor que garanticen que los fondos y otros recursos económicos recaudados con fines religiosos, culturales o benéficos no se desvíen hacia otros fines, en particular la financiación del terrorismo.

No obstante, en el caso de las entidades que, fuera del ámbito de aplicación del derecho civil común, deseen constituirse en personas jurídicas religiosas, organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas de solidaridad social, se aplica un marco legal especial.

Según dicho marco, que prevé esencialmente la concesión de beneficios fiscales, existen diversas obligaciones relativas al registro y la supervisión, que son más restrictivas en el caso de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones privadas de solidaridad social.

Hay que subrayar que se ha realizado una encuesta sobre las 505 personas jurídicas religiosas, 4.055 instituciones privadas de solidaridad social y 93 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo que existen en Portugal y que no hay razones para creer que una posible desviación de fondos guarde relación alguna con la financiación del terrorismo.

El Marco legal general de las instituciones de crédito y sociedades financieras (Decreto Ley 298/92) define, en sus artículos 3 y 6, respectivamente, los diversos tipos de instituciones de crédito y sociedades financieras. Estipula que los servicios de envío o transferencia de fondos están sujetos a la autorización previa emitida por el Banco de Portugal; en consecuencia, se **prohíben expresamente los servicios alternativos como los de hawala o hundi**. Las autoridades portuguesas no saben de la existencia de tales servicios en Portugal, lo que permite suponer que de existir tendrán muy poca importancia.

Apartado a) del párrafo 2

Es cierto que la excepción al principio de la competencia territorial (apartado a) del párrafo 1) no parece ser suficientemente amplia para incluir las situaciones transnacionales en que los principios lesionados no tienen carácter nacional.

Sin embargo, la legislación penal portuguesa, aparte de los principios de competencia territorial, interés nacional y nacionalidad, se rige también por los principios de aplicación universal y de pluralidad en la comisión de un delito. Esos principios siempre se pueden utilizar para soslayar alguna dificultad de este tipo, en los casos de:

- Una actuación penal iniciada en otro Estado en la que se requiere, a través de un procedimiento legal, la congelación de activos en Portugal;
- La aplicación directa de convenios internacionales ratificados por Portugal;
- La transposición en el ordenamiento jurídico portugués de las disposiciones de esos convenios.

Aparte de las medidas mencionadas más arriba y a riesgo de parecer redundante, hay que hacer referencia a:

- Las medidas preventivas dirigidas al sistema bancario y financiero, entre otras las recomendaciones especiales del Grupo de Trabajo sobre medidas financieras acerca de la financiación del terrorismo;
- La política general y específica de prevención del delito en la que se basa la legislación penal portuguesa, y que en sí misma disuade de la comisión de actos considerados ilícitos con arreglo a la legislación actualmente en vigor;
- Un régimen especial previsto en el Código de Procedimiento Penal, que prevé la renuncia a la exigencia de la autorización judicial para los registros y registros personales, las escuchas telefónicas y las detenciones en circunstancias que no sean las de flagrante delito, cuando haya pruebas de la comisión del delito de terrorismo (entre otros);
- La Ley de Seguridad Interior que prevé en particular el cierre de las empresas y grupos que se dedican a la delincuencia altamente organizada, concretamente el terrorismo, o a la preparación, la formación o reclutamiento de personas con tales fines.
- La Ley 101/2001, que permite a las autoridades responsables de la investigación criminal llevar a cabo actividades encubiertas, siempre que guarden proporción con el objetivo de la investigación criminal y con la gravedad del delito.

Aunque la ley no define la justificación razonable (Decreto Ley 399/93), el Marco legal para la utilización y porte de armas (Ley 22/97) condiciona la expedición o renovación de licencias de armas de defensa a que el solicitante tenga más de 21 años y cumpla todos los requisitos siguientes:

- Tener plena capacidad para ejercer todos sus derechos civiles y políticos;
- Demostrar que necesita esa licencia por razones profesionales o por imperativos de defensa personal;
- No haber sido objeto de medidas de seguridad ni haber sido condenado por un tribunal por la comisión de delitos, entre otros de terrorismo y de pertenencia a organizaciones terroristas;
- Sea objeto de examen médico, pruebas psicológicas y pruebas de habilidad y cumplir los requisitos correspondientes.

Las licencias expirarán inmediatamente si el arma se utiliza para un fin diferente del declarado.

Quienes posean un arma de defensa o de caza sin la licencia necesaria, o traspasen ese arma a alguien que no posea la licencia, serán sancionados con prisión de hasta 2 años o multa de hasta 240 días.

Apartado b) del párrafo 2

La Oficina de Coordinación de la Seguridad (que depende del Ministerio de Asuntos Interiores por delegación del Primer Ministro) asegura la coordinación operacional de las fuerzas y servicios de seguridad. Esa coordinación se centra en las operaciones en gran escala, como Euro 2004, y en los intercambios semanales de estadísticas de delitos.

Tras el 11 de septiembre se creó dentro de ese sistema un grupo de trabajo para elaborar un documento semanal sobre la evaluación de las amenazas terroristas en el territorio nacional.

En lo que se refiere a la información operacional (prevención), la coordinación incumbe al Consejo Consultivo del Ministerio del Interior, en el que todas las fuerzas y servicios de seguridad dan su opinión sobre cuestiones de seguridad interior.

El intercambio de información operacional caso por caso no pasa por la Oficina de Coordinación de la Seguridad (foro ampliado de coordinación operacional) sino que se trata a nivel bilateral, de conformidad con el principio que limita esa información exclusivamente a los interesados, el secreto de la investigación criminal y la protección de los datos relativos a las personas.

Así, la represión de la financiación del terrorismo corre a cargo de la Policía Judicial y del sistema financiero nacional (bancos y compañías de seguros) — Ministerio de Finanzas, Banco de Portugal e Instituto Portugués de Seguros. A nivel operacional la información necesaria para los fines de la investigación criminal se intercambia mediante contactos bilaterales directos entre las autoridades judiciales (Ministerio Fiscal y Policía Judicial) y los bancos (Ley 5/2002).

Siempre existe una obligación especial de colaboración entre las fuerzas y servicios de seguridad en lo que se refiere al intercambio de información sobre cuestiones relacionadas con la protección y salvaguardia de la seguridad interior, así como con la represión del terrorismo.

En consecuencia, cada entidad está obligada a comunicar al órgano legalmente competente en cada caso todos los hechos o información de interés mutuo o que puedan interesar exclusivamente al receptor: el Servicio de Información de Seguridad coopera con las fuerzas y servicios de seguridad, la Policía Judicial con otras fuerzas y servicios de seguridad y órganos públicos competentes en cuestiones relacionadas con la seguridad interior.

Por último, hay que señalar que el Sistema de Protección Civil —que actúa en coordinación con el Sistema de Planificación Civil para Emergencias (Primer Ministro/Ministerio de Defensa)— trabaja paralelamente con el Sistema de Seguridad Interior (véase Ley marco sobre protección civil, anexo III, artículo 14). Las fuerzas armadas, las fuerzas y servicios de seguridad y las brigadas de incendios, entre otros, son agentes de la protección civil.

Apartado c) del párrafo 2 * <http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-penal/mpenal-ce.html>

Cooperación judicial en materia penal

Acuerdos multilaterales:

- Convenio europeo sobre cooperación judicial en materia penal y su Protocolo Adicional, Consejo de Europa (ratificado en 1994) y Convenio sobre cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea;
- Convenio europeo sobre extradición (ETS No. 24) (abierto a la firma el 13 de diciembre de 1957; entrada en vigor el 18 de abril de 1960);

- Protocolo adicional del Convenio europeo sobre extradición (ETS No. 086) (abierto a la firma el 15 de octubre de 1975; entrada en vigor el 20 de agosto de 1979);
 - Segundo Protocolo adicional al Convenio europeo sobre extradición (ETS No. 098) (abierto a la firma el 17 de marzo de 1978; entrada en vigor el 5 de junio de 1983);
 - Convenio europeo sobre la vigilancia de los delincuentes bajo condena condicional o en libertad condicional (ETS No. 051) (abierto a la firma el 30 de noviembre de 1964; entrada en vigor el 22 de agosto de 1975);
 - Convenio europeo sobre el control de la adquisición y posesión de armas de fuego por particulares (ETS No. 101) (abierto a la firma el 28 de junio de 1978; entrada en vigor el 1° de julio de 1982).
- Objetos comprendidos en el anexo 1, párrafo 1, apartados j) a n), y párrafos 2 y 3;
- Convenio sobre la transferencia de personas condenadas (ETS No. 112) (abierto a la firma el 21 de marzo de 1983; entrada en vigor el 1° de julio de 1985);
 - Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito (ETS No. 141) (abierto a la firma el 8 de noviembre de 1990; entrada en vigor el 1° de septiembre de 1993).

Acuerdos bilaterales:

España

- Acuerdo sobre persecución transfronteriza, concertado con España en 1998;
- Acuerdo sobre la represión del tráfico ilícito de drogas por mar, concertado con España en 1998;
- Acuerdo sobre cooperación judicial en materia civil y penal, concertado con España en 1997;
- Acuerdo sobre la creación de puestos fronterizos comunes, concertado el 19 de noviembre de 1997;
- Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular, concertado el 15 de febrero de 1993;
- Protocolo de Acuerdo sobre cooperación policial, firmado el 9 de marzo de 1992,
- Acuerdo sobre cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas, concertado con España en 1987;

Francia

- Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular, concertado con Francia y firmado el 8 de marzo de 1993;

Países Bajos

- Acuerdo relativo a los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño de las funciones oficiales de los funcionarios de enlace de Europol.

Suiza

- Acuerdo relativo al trato recíproco en materia de permisos de residencia, firmado el 12 de abril de 1990;

Bulgaria

- Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular, concertado con Bulgaria y firmado el 20 de octubre de 1997;

Hungría

- Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular, firmado el 28 de enero de 2000;

Lituania

- Acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular, firmado el 11 de febrero de 1999;

Federación de Rusia

- Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, concertado con la Federación de Rusia en 2001;

Angola

- Acuerdo de cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas y delitos conexos, concertado con Angola en 1995;
- Acuerdo de cooperación en cuestiones legales y judiciales, firmado el 30 de agosto de 1995;

Botswana

- Acuerdo sobre extradición, firmado el 6 de febrero de 1970;

Cabo Verde

- Acuerdo de cooperación técnica en cuestiones policiales, firmado el 13 de junio de 1988;

Guinea-Bissau

- Acuerdo sobre cooperación judicial, firmado el 5 de julio de 1988;
- Protocolo adicional al Acuerdo sobre cooperación judicial, firmado el 5 de marzo de 1989;

Mozambique

- Acuerdo de cooperación para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas y delitos conexos, concertado con Mozambique en 1995;
- Acuerdo de cooperación en materia legal y judicial, firmado el 12 de abril de 1990;
- Protocolo adicional al Acuerdo de cooperación en materia legal y judicial, firmado el 26 de junio de 1990;

Santo Tomé y Príncipe

- Acuerdo sobre cuestiones judiciales, firmado el 23 de marzo de 1976;
- Protocolo adicional al Acuerdo sobre cuestiones judiciales, firmado el 18 de julio de 1997;
- Protocolo de cooperación relativo al establecimiento de un Centro de capacitación e investigación en cuestiones legales y judiciales, firmado el 11 de septiembre de 1992;

Marruecos

- Convenio sobre cooperación judicial en materia penal, concertado con Marruecos en 1998;
- Convenio sobre asistencia a los detenidos y transferencia de personas condenadas, concertado con Marruecos en 1998;
- Acuerdo de cooperación para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, firmado el 28 de abril de 1992;

Túnez

- Tratado de cooperación judicial en materia penal, celebrado con Túnez en 1998;

Argentina

- Convenio para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, concertado con Argentina en 1997;

Brasil

- Tratado de cooperación judicial en materia penal, celebrado con Brasil en 1991;
- Acuerdo de cooperación para reducir la demanda, luchar contra la producción y reprimir el tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, concertado con Brasil en 1991;
- Tratado de cooperación judicial en materia penal, firmado el 7 de mayo de 1991;
- Tratado sobre extradición, firmado el 7 de mayo de 1991;

- Acuerdo de cooperación para reducir la demanda, luchar contra la producción y reprimir el tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, firmado el 7 de mayo de 1991;
- Tratado de amistad, cooperación y consulta firmado el 22 de abril de 2000;

Canadá

- Tratado de cooperación judicial en materia penal, celebrado con el Canadá en 1997;

Cuba

- Acuerdo sobre la cooperación para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, concertado con Cuba en 1998;

México

- Tratado sobre cooperación judicial en materia penal, concertado con México en 1998;

Uruguay

- Convenio para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas y sus precursores y productos químicos esenciales, concertado con Uruguay en 1998;

Venezuela

- Acuerdo sobre la prevención, el control, la vigilancia y la represión del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, concertado con Venezuela en 1994;

Australia

- Tratado sobre cooperación judicial en materia penal, celebrado con Australia en 1989;

Macao

- Acuerdo sobre la transferencia de personas condenadas, firmado el 7 de diciembre de 1999;

Tailandia

- Tratado de cooperación para la ejecución de penas, firmado el 1º de abril de 1985;

Extradición

Instrumentos multilaterales:

- Convenio europeo sobre extradición y sus dos Protocolos adicionales (Consejo de Europa);

- Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea;
- Convenio sobre procedimientos simplificados de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Instrumentos bilaterales:**Botswana**

- Acuerdo sobre extradición, concertado con Botswana en 1970;

Cabo Verde

- Acuerdo judicial y sus dos protocolos, concertado con Cabo Verde en 1976 y 1982;

Túnez

- Tratado sobre extradición, celebrado con Túnez en 1998;

Argentina

- Convenio para la extradición mutua de delincuentes, concertado con Argentina en 1998;

Bolivia

- Tratado sobre comercio, navegación y extradición, celebrado con Bolivia en 1879;

Brasil

- Tratado de extradición, celebrado con Brasil en 1991;

Estados Unidos de América

- Convenio sobre extradición, concertado con los Estados Unidos de América en 1908;

México

- Tratado sobre extradición, celebrado con México en 1998;

Australia

- Tratado sobre extradición, celebrado con Australia en 1989.

Apartado d) del párrafo 2

No se han introducido en la legislación portuguesa enmiendas concretas en relación con la lucha contra el terrorismo porque el ordenamiento jurídico portugués (tal como se describe en relación con el apartado a) del párrafo 2) permite la intervención de las autoridades incluso en situaciones en que las amenazas terroristas se dirigen a personas o entidades fuera de Portugal. El único cambio establecido después del 11 de septiembre fue en virtud de la Ley 10/2002 que mejora los mecanismos

relacionados con la lucha contra el blanqueo de dinero y, por extensión, la financiación. Así, se establecieron nuevos vínculos de cooperación y se reforzaron los ya existentes entre las autoridades portuguesas y las autoridades extranjeras correspondientes. También se ha reforzado la presencia portuguesa en los órganos multilaterales que se ocupan de la lucha contra la delincuencia. Hay que señalar, a este respecto, la labor que desarrolla Portugal en el marco de Europol.

Apartado f) del párrafo 2

La asistencia judicial en materia penal está reglamentada en Portugal por las leyes 144/99 y 104/2001, que se aplican con carácter subsidiario a falta de un instrumento internacional que tenga fuerza obligatoria para el Estado portugués.

La ley no establece ningún plazo para responder a las solicitudes de cooperación judicial presentadas por otros países. La satisfacción de esas solicitudes depende, entre otras cosas, de las medidas que hayan de tomarse, los recursos humanos o técnicos necesarios y el grado de complejidad de las investigaciones que haya que realizar. Sin perjuicio de todo esto, cabe decir que por término medio esas solicitudes se satisfacen en el plazo de 30 días.

El principio de reciprocidad se recoge en el artículo 4 de la Ley 144/99, actualizada por la Ley 104/2001. Según ese artículo, el Ministerio de Justicia pedirá una garantía de reciprocidad, de ser aplicable, y podrá dar esa garantía a otros Estados. Sin embargo, la falta de reciprocidad no impide la satisfacción de una solicitud de cooperación, siempre que sea conveniente considerando la naturaleza del acto o la necesidad de luchar contra ciertas formas de delincuencia, incluido el terrorismo.

Apartado g) del párrafo 2

Véase la respuesta al apartado b) del párrafo 2.

Apartado c) del párrafo 3

La concertación de acuerdos bilaterales concretos para la prevención y represión del terrorismo no ha sido práctica habitual en Portugal. Señalaremos sólo el Acuerdo sobre cooperación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, concertado con Marruecos en 1992. Sin embargo, los acuerdos bilaterales concertados con otros Estados en relación con la cooperación judicial en materia penal también incluyen disposiciones sobre la prevención, detección y represión del terrorismo y de los grupos u organizaciones terroristas, como sucede, por ejemplo, en el Acuerdo de cooperación para luchar contra la delincuencia concertado con Rusia en 2000 (a este respecto, véase la respuesta al apartado c) del párrafo 2, que incluye la lista de los acuerdos y tratados bilaterales sobre extradición y cooperación judicial concertados por Portugal).

[A nivel de la Unión Europea y dentro del marco de su Plan de Acción en esta esfera hay que hacer referencia a la decisión adoptada recientemente de introducir una cláusula sobre el terrorismo en todos los acuerdos de cooperación y asociación con terceros Estados.]

Apartado d) del párrafo 3

Portugal ratificó los 12 convenios de las Naciones Unidas relativos al terrorismo.

Como se ha dicho antes, siempre que es necesario Portugal promulga la legislación oportuna para introducir en su ordenamiento jurídico interno las disposiciones de los instrumentos internacionales en los que es parte Portugal. Se están estudiando actualmente posibles enmiendas al Código Penal, considerando la próxima entrada en vigor del Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo, ratificado por Portugal el 2 de agosto de 2002.

Apartado e) del párrafo 3

Como se ha mencionado en la respuesta al apartado e) del párrafo 2, la Ley 144/99 se aplica con carácter subsidiario en ausencia de instrumentos internacionales en la materia con fuerza vinculante para el Estado portugués. De conformidad con el artículo 31, la extradición puede tener lugar a los efectos de un procedimiento penal o de la ejecución de una pena o de la aplicación de una medida de seguridad que entrañe la privación de libertad por un delito del que puedan entender los tribunales del Estado que solicita la extradición. Para cualquiera de esos fines, la entrega de la persona cuya extradición se solicita sólo es admisible en relación con delitos, incluso en grado de tentativa, que sean sancionables, tanto según la legislación portuguesa como según la legislación del Estado solicitante, con una pena que entrañe la privación de libertad por un período no inferior a un año.

Así pues, esa disposición es aplicable a los delitos relacionados con organizaciones terroristas o con el terrorismo previstos en los artículos 300 y 301 del Código Penal, considerando las penas aplicables en abstracto a los autores de tales delitos.

Párrafo 4

Desde el 11 de septiembre de 2001, se ha respondido a muchas de las preocupaciones expuestas en el párrafo 4 de la resolución 1373 (2002) del Consejo de Seguridad, que se han tenido en cuenta en varias declaraciones hechas por Portugal en diversas ocasiones, en particular con ocasión de la Presidencia portuguesa de la Organización para la Seguridad de la Cooperación en Europa y en la Cumbre Iberoamericana.
